



Serie de Documentos Regionales
Urabá Antioqueño



Presentación

Con el objetivo de proporcionar un análisis detallado y brindar algunas reflexiones que recojan la visión y necesidades de direccionamiento de esfuerzos para la efectiva implementación del Acuerdo Final en la subregión, la ART presenta este informe, como uno de los 16 informes subregionales, que amplían el panorama suministrado en el *Informe de Seguimiento a la Implementación de los PDET 2023*.

Este documento consta de tres secciones. La primera ofrece una visión general de la subregión, abarcando condiciones intrínsecas a su dinámica demográfica, así como las características territoriales, económicas y ambientales más destacadas. Posteriormente, la segunda sección, presenta un análisis del estado de avance de la implementación, durante el período 2018-2022, del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), como medio de instrumentalización del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la subregión. Para este propósito, se analizan indicadores estratégicos de producto y resultado, desde una perspectiva multidimensional que abarca aspectos económicos, sociales, ambientales, justicia y seguridad. Esta mirada se complementa con percepciones de los actores locales, quienes ofrecen perspectivas valiosas para comprender los avances y desafíos presentes en la subregión.

Por último, en la tercera sección, se identifican las apuestas regionales como insumo para el direccionamiento de esfuerzos en apoyo a un proceso de toma de decisiones informadas. Este análisis integral contribuye a la definición de estrategias concretas para aprovechar las potencialidades del territorio y abordar los desafíos hacia una senda de desarrollo sostenible.

¿Cuál es la visión de la Subregión?



"La siguiente propuesta de visión recoge elementos de los diferentes momentos de la ruta participativa del PDET. La visión territorial es producto de un proceso de construcción permanente al que deberán sumarse otros actores del territorio.

En el año 2028 la Subregión PDET de Urabá tendrá comunidades rurales y étnicas que participan social, económica y políticamente en la transformación regional y contará con una institucionalidad que garantiza el respeto de los derechos y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, como proceso reparador y base para la no repetición, la reconciliación y la paz.

Será un territorio soportado en una educación transformadora, con cadenas productivas y económicas integradas a la conservación de los recursos naturales, con una política pública que garantice la seguridad alimentaria, conectado con el mundo a través del sistema portuario, que potencie sus vías terciarias y consolide los corredores viales."

PATR Subregión Urabá Antioqueño

Panorama territorial

Contar con el panorama territorial sobre las características de población, economía y recursos es preponderante cuando de avanzar en los diferentes frentes del desarrollo socioeconómico y ambiental en un territorio se trata. Estas variables permiten caracterizar de manera general a los territorios y dan una perspectiva de la magnitud de los desafíos y oportunidades existentes en los diferentes focos a los que la política pública atiende, por esta razón, a continuación, se describen los principales indicadores del panorama territorial de la Subregión Urabá Antioqueño.

Demografía



Población (2023)
383.911 habitantes
7 % del total PDET

Urbano



49%

Rural



51%

Hombres



48,8%

Mujeres



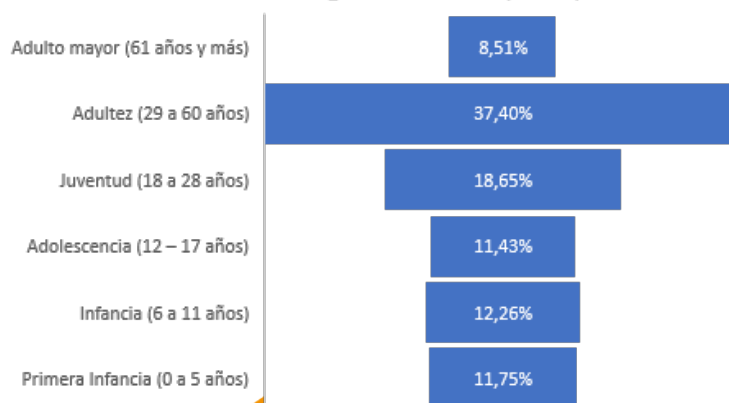
51,2%

De acuerdo con la información del Censo 2018, del total de jefaturas de hogar en la subregión, el 40,5% lo ocupan mujeres.



De acuerdo con la información del Censo 2018, del total de población en la subregión, el 40,4% de las personas se identifican como afrodescendientes, y el 3,3% se identifican como indígenas.

Población según ciclo vital (2023)



Fuente: CNPV 2018 – DANE.

Características Económicas



Valor Agregado

\$9,7 billones
(2021)



21,8%

>

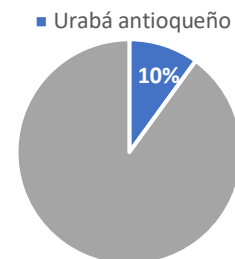


18,6%

De acuerdo con las cifras económicas del DANE, para el año 2021 la subregión registró 9,7 billones en su valor agregado, lo cual representa una variación positiva de 18,6 % frente al 2020; sin embargo, se observa que esta variación es menor al promedio PDET (21,8 %). Con relación al 2018 (7,7 billones), se observa un crecimiento de 25,7 %

En 2021 la subregión tuvo una participación dentro del total del valor agregado del PDET de 10%.

En 2021 fue la tercera subregión con mayor valor agregado del total PDET.



El **sector primario** (agropecuaria, silvicultura y pesca y explotación de minas y canteras) registró un valor agregado de **\$3,5 billones**, con una variación de 16,6% frente al 2020 y 38,3% frente a 2018. Este sector participa con el 36,5% del valor agregado de la subregión.



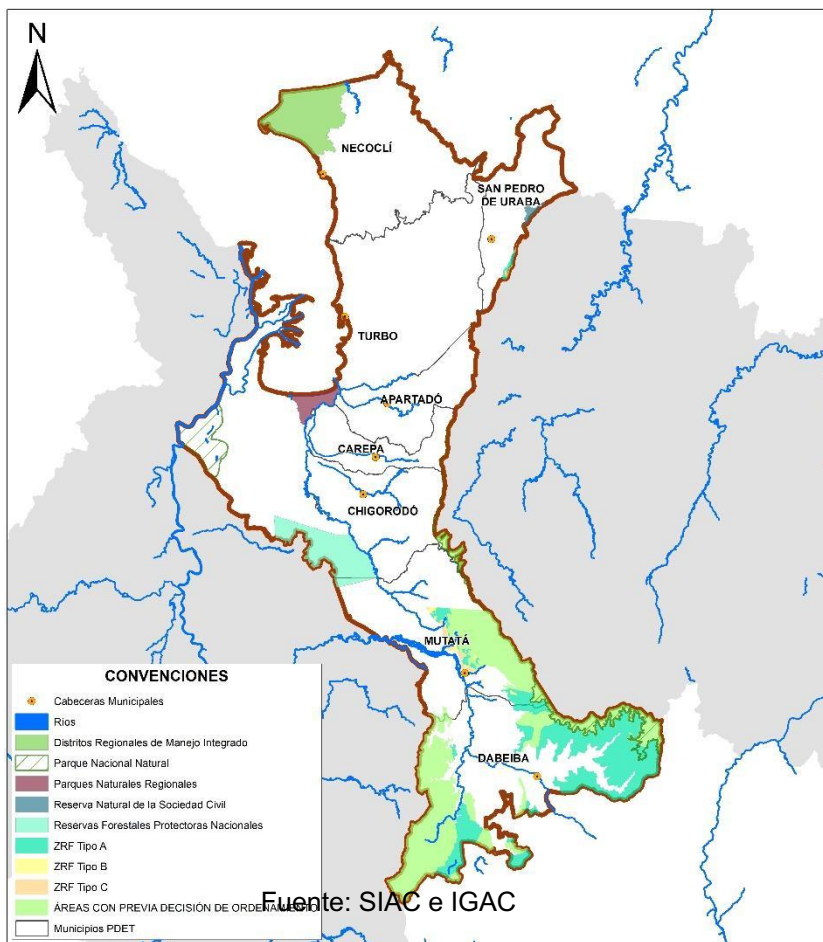
El **sector secundario** (industrias manufactureras) registró un valor agregado de **\$678 mil millones**, con una variación de 21,8% frente al 2020 y -9,2% frente a 2018. Este sector participa con el 7% del valor agregado de la subregión.



El **sector terciario** (suministro de servicios públicos, comercio, transporte, servicios, entre otros) registró un valor agregado de **\$5,5 billones**, con una variación de 19,6% frente al 2020 y 24,3% frente a 2018. Este sector participa con el 56,5% del valor agregado de la subregión.

Recursos - Biodiversidad y medio ambiente

La subregión cuenta con cerca de 61.214 hectáreas de cuerpos de agua, donde se destacan grandes zonas de pantano, manglares y drenajes dobles, como el Río Sucio y Río Atrato. Por otro lado, se encuentra que el 0,2 % del área de los parques nacionales naturales del país se localizan en la subregión, siendo el Parque Paramillo el más grande de la subregión con cerca de 14.591 hectáreas.



Fuente: SIAC e IGAC

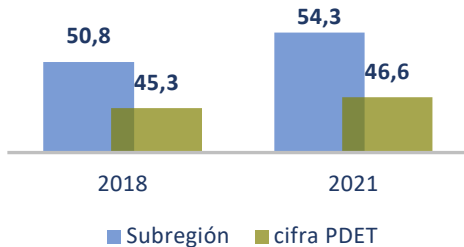
Fuente: SIAC e IGAC

En la subregión hay zonas de reserva forestal Ley Segunda¹. Las áreas con previa decisión de ordenamiento son las que tienen más área, con cerca de 91 mil hectáreas, seguidas del tipo A, con 55 mil hectáreas.

¹ Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son áreas establecidas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Para más información sobre las tipologías de Reserva Forestal establecidas por la Ley 2ª de 1959 consultar el siguiente link: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Reservas-Forestales-establecidas-por-la-Ley-2-de-1959.pdf>

Criterios de focalización PDET²

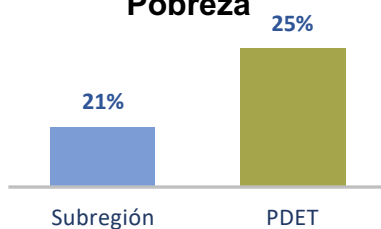
Medición de desempeño municipal



La subregión no ha presentado avances en el indicador que mide el desempeño municipal. Para el 2021 se registró un puntaje de 54,3, lo cual representa una reducción de 2,3 p.p. frente al año inmediatamente anterior. Con relación al 2018 este indicador presentó un aumento de 3,6 p.p. (50,8). Se destaca el municipio de San Pedro de Urabá, el cual registró un incremento de 8,4 p.p. para el 2021, pasando de 37,3 a 45,7. En contraste, Mutatá redujo su índice en 12,4 p.p., pasando de 60,1 a 47,7.

Fuente: DNP

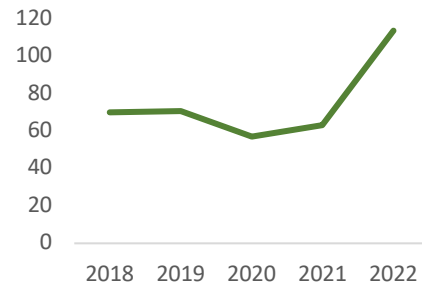
Pobreza



De acuerdo con la encuesta de seguimiento a la línea base de los PDET realizada por la ART, se estima que la pobreza multidimensional en la subregión fue de 24,3 %, la cual se encuentra por debajo del resultado PDET en 2,7 p.p. El indicador con mejor resultado en 2022 fue trabajo infantil, el cual tuvo una incidencia de 4,1 % en el territorio. En contraste, el indicador con mayor reto en la subregión es empleo informal con una incidencia de 80,5 % en los hogares de la subregión.

Fuente: Cálculos ART con base en Evaluación Línea base

Hectáreas de coca



Para el 2022 se registraron 114 hectáreas (ha) de cultivos de coca, lo cual representa un crecimiento de 80 %, 50 ha, frente al año anterior. Con respecto al 2018, los cultivos han incrementado en 44 ha. En esta subregión todos los municipios incrementaron en 2022 los cultivos de coca.

Fuente: Ministerio de Justicia - UNODC

Índice de incidencia del conflicto armado

■ Bajo ■ Medio Bajo ■ Medio ■ Alto ■ Muy Alto



De acuerdo con el índice de incidencia del conflicto armado de 2021, en la subregión el 62,5% de los municipios se encuentran en la categoría de riesgo medio bajo. El restante 37,5 % se distribuye de manera equitativa en las categorías de medio, alto y muy alto. Desde el 2018, el cambio más significativo fue el incremento de la categoría muy alto en 12,5 p.p.

Fuente: DNP

² Los indicadores relacionados con la encuesta de seguimiento de línea base incluye el área urbana de todos los municipios de la subregión.

PDET ¿Cómo vamos?

Las comunidades rurales y étnicas de la Subregión de Urabá Antioqueño tendrán un papel preponderante en la transformación regional, la cual buscará el respeto de los derechos y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, como un proceso reparatorio y fundamental para la no repetición. Esto se realizará a través de una educación transformadora, con cadenas productivas y económicas que estén enfocadas en la conservación de los recursos naturales.

En este sentido se establecen cuatro (4) dimensiones que materializan las potencialidades de la región en lo Económico, Social, Ambiental y Justicia y seguridad con el fin de presentar el estado de avance en el cierre de brechas socioeconómicas a partir de diferentes indicadores, así como la percepción de la comunidad frente a lo que ocurre en territorio. A partir de la metodología de prospectiva desarrollada por la ART, se identifican las potencialidades de la subregión a partir de diversas fuentes e instrumentos de planeación con el fin de proponer una serie de apuestas regionales que permitan orientar los esfuerzos de política pública atendiendo las particularidades y la visión de las comunidades definida en los PATR.

1. Dimensión económica

Las acciones por adelantar para satisfacer las necesidades manifiestas por las comunidades en sus percepciones de esta dimensión pasan por asegurar que los pequeños productores cuenten con los recursos que le den seguridad al desarrollo de su producción (tierras formalizadas, acceso a presupuesto, apoyo en generación de competencias), así como con medios que les permitan conectar sus territorios, tanto de manera física como digital, como requerimiento esencial para la comercialización. En este sentido, los indicadores medidos a nivel nacional evidencian rezagos y avances en estos ámbitos.

Comenzando por la regularización de la tenencia de la tierra esta es esencial toda vez que brinda seguridad jurídica a los poseedores y contribuye al desarrollo sostenible, la inversión productiva y el acceso a programas de desarrollo rural. De acuerdo con los datos del Observatorio de Tierras Rurales - OTR, para el periodo 2017 - 2021, el número de hectáreas formalizadas y adjudicadas en la subregión de Urabá Antioqueño fue de 2,404 hectáreas. El año que más se formalizaron y adjudicaron hectáreas fue 2017 con 1,189 hectáreas, mientras que en el 2022 se adjudicaron 272 hectáreas. En línea con esto, y de acuerdo con datos de Ministerio de Agricultura, entre 2018 y 2022, se formalizaron 2 resguardos y/o títulos colectivos en la subregión de Urabá Antioqueño.

La narrativa de las comunidades da cuenta de estos avances, pero también de las brechas que persisten. En municipios como Carepa o Turbo, por ejemplo, no hay tierras disponibles para titulación o ampliación de predios de algunos productores, sin embargo, se ha avanzado en la titulación de ocupantes con “sana posesión”:



PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES

“La Agencia Nacional de Tierras sí ha venido haciendo un trabajo grande aquí junto con la con la Junta de Acción Comunal, va por la legalización de 103 predios que van a tener sus títulos. No son áreas grandes, sino que fueron como parceleros que vendieron sus tierras por lotes”

(Mujer líder Carepa, Evaluación LB 2022)

Se percibe también que las mujeres productoras deben afrontar más barreras en el acceso a la formalización de tierras pues no cuentan con la información necesaria para adelantar estos trámites, y también por estigmatización o prejuicio contra ellas:



PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES

“Las mujeres también nos hemos venido empoderando en estos proyectos productivos que los podemos sacar adelante y lo hemos demostrado, nosotros tenemos aquí en esta granja Amigrac, que quiere decir, Asociación de Mujeres impulsadoras del Desarrollo Granja Casa Nova. Tenemos 14 años de estar trabajando como grupo, cierto, hemos tenido proyectos de ají tabasco y hemos exportado para México, hemos hecho proyectos de yuca en grande, en tierra ajena, por qué, por qué las mujeres no pueden tener tierra, por qué nosotras las mujeres no podemos acceder a las tierra, nosotros nos dan un comodato por 5 años, pero a los 4 meses de haber hecho el comodato, que las vamos a sacar de aquí, que ósea, nosotros siempre hemos vivido este flagelo aquí en este lugar, pero si nosotras estuviéramos en nuestra propia tierra con escritura y con todas esas cosas nosotros viviríamos más sabroso, de pronto las mujeres se empoderaban aún más todavía poner a producir esto.”

En paralelo con dicha formalización de predios, la financiación de los proyectos a pequeña y mediana escala resulta fundamental con el fin de brindar un desarrollo económico sostenible al territorio. En este aspecto, de acuerdo con cifras de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre el 2018 y 2022 tanto el número de créditos aprobados a pequeños productores agrícolas como su valor en la subregión crecieron, por una parte en 145,7 % (3,209 créditos), pasando de 2,203 en 2018 a 5,412 créditos en 2022 y por otra en 131,5 %, pasando de \$ 19,960 millones en 2018 a \$ 46,214 millones en 2022. Así mismo, se encuentra que la subregión obtuvo un crecimiento de 10,9 % en la cantidad de créditos aprobados a pequeños productores, con relación al 2021 (4.879) y un crecimiento del 19,9 % en el valor de los créditos con relación al año 2021 (\$38,543 millones).

Adicionalmente, si bien en búsqueda de impulsar un desarrollo sostenible en la producción agropecuaria, desde las necesidades manifestadas e identificadas de las comunidades de los

Documentos Regionales

territorios PDET, el sector agropecuario ha diseñado estrategias para el mejoramiento de procesos, tecnificación y capacitación para los pequeños productores agrícolas. De acuerdo con datos de la Agencia de Desarrollo Rural, entre el 2019 y el 2022, el número de productores en el registro que recibieron el servicio de extensión agropecuaria fue de 3.032. Se encuentra que en el 2022 solo se inscribieron al servicio de extensión agropecuaria 441 productores, lo cual representa una disminución de 83 % frente al 2021 (2,591).

En lo relacionado con la conectividad digital, las dinámicas actuales del comercio y el relacionamiento con los clientes exigen que la formación de capital humano sea un factor indispensable para la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico de la subregión. A pesar de esto, los datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evidencian que, en el 2022 el índice de penetración de internet fijo para la subregión de Urabá Antioqueño fue de 14 %, lo cual representa una disminución de 0,3 p.p. frente al 2021.

Así mismo, la conectividad al interior de la subregión y con el resto del país se constituye en un factor clave para el desarrollo económico, dado que facilita el establecimiento de alianzas productivas y comerciales entre los diferentes territorios. Por esta razón, se encuentra que la construcción y el mejoramiento de vías de transporte se configuran como medidas detonantes para la economía de la subregión. En línea con esto, según la información obtenida a través de la línea de base para el seguimiento y evaluación de los PDET por parte de la ART, para el 2022 en la subregión de Urabá Antioqueño el 46.8 % de los hogares indicaron que alguna vía cercana a su vivienda había sido mejorada, rehabilitada o le habían hecho mantenimiento en los últimos dos años, manteniéndose constante con respecto al 2018.

Finalmente, la provisión del servicio de energía eléctrica resulta indispensable para el desarrollo económico ya sea en procesos de tecnificación del campo o el asentamiento industrial. De acuerdo con la información de Ministerio de Minas y Energía, en la subregión de Urabá Antioqueño no se presentaron conexiones de nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica en el periodo de 2019 a 2022.

Unos ordenes de magnitud más claros sobre los rezagos que persisten en las diferentes aristas de desarrollo económico previamente mencionadas, se documentan en la **Metodología del Cierre de Brechas (MCB)**³ del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según sus últimos resultados publicados, se cuenta con brechas referentes a tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), energía, agricultura, desarrollo económico y transporte en línea con los indicadores y percepciones descritas a este punto.

Se encuentra que Turbo es el que presenta las brechas más altas en las dimensiones de TIC (84,7 %) y desarrollo económico (74,0 %). Así mismo, se encuentra que San Pedro de Urabá presenta la brecha más alta en agricultura (45,2 %), mientras que Necoclí presenta las segundas brechas más altas en TIC (78,7 %) y agricultura (44,5 %). Por el contrario, se destacan los municipios de Apartado y Carepa, los cuales presentan las brechas más bajas en TIC (53,9 %) y Agricultura (32,8 %) respectivamente.

³ La MCB, propuesta por el DNP, tiene como objetivo identificar, analizar y abordar las diferencias o brechas que existen entre distintos grupos de población en términos de acceso a recursos, servicios y oportunidades a través de diversas dimensiones. Estas dimensiones tienen una estrecha relación con los indicadores vistos hasta aquí, por lo cual resulta relevante analizar las brechas de cada uno de los municipios de esta subregión, con el fin de entender más a fondo las desigualdades y diseñar políticas públicas efectivas que promuevan la equidad y el desarrollo sostenible en esta subregión. Para más información: <https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/Methodolog%C3%ADaDeCierredeBrechas.aspx>

Tabla 1. Brechas dimensión económica

Municipio	TIC	Desarrollo económico	Agricultura	Transporte	Energía
Apartadó	53,9%	69,0%	36,3%	4,1%	-
Carepa	56,9%	63,8%	32,8%	4,1%	-
Chigorodó	57,3%	69,0%	37,7%	4,1%	-
Dabeiba	64,7%	45,4%	39,8%	4,1%	-
Mutatá	77,4%	65,3%	44,1%	4,1%	-
Necoclí	78,7%	41,3%	44,5%	4,1%	-
San Pedro de Urabá	62,0%	60,8%	45,2%	4,1%	-
Turbo	84,7%	74,0%	44,1%	4,1%	-

Fuente: DNP

Retos y oportunidades de la dimensión económica

Dentro de las necesidades identificadas por las comunidades, se destaca de manera continua la necesidad de construir nuevas vías y mejorar las existentes. Este tipo de infraestructura no solo representa conexiones físicas entre diferentes áreas geográficas, sino que se configura como las bases fundamentales para el progreso integral y sostenible del municipio.

La construcción y adecuación de vías desempeña un papel crucial en el fomento de la conectividad, facilitando el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el comercio. Una red vial eficiente y moderna no solo acorta distancias, sino que también acelera la circulación de bienes, servicios y personas, impulsando así el crecimiento económico local y la generación de empleo.

Por otro lado, el alto costo de los insumos agropecuarios ha elevado el costo de producción. Eso ha llevado a que productos con un fuerte arraigo en la región como el plátano o la yuca dejen de ser rentables y se reemplacen por otros nuevos. Para solventar esta situación se reconoce la importancia de contar con asistencia técnica y el mejoramiento de las semillas, y continuar con estrategias como los mercados campesinos que les permiten llegar al consumidor sin intermediarios.

2. Dimensión social

Las percepciones de la comunidad dan línea de la necesidad de abordar la dimensión social desde distintos frentes: salud, educación, orden territorial e inclusión. En este sentido, los indicadores medidos a nivel nacional evidencian rezagos y avances en la dimensión social, incluyendo el acceso a la salud, la educación, el goce de una vivienda digna, entre otros.

Avances y rezagos en materia de salud

El acceso a la salud es un derecho que impacta significativamente el bienestar de una comunidad. Una vez se garantiza su goce efectivo se promueve la equidad y se reduce la carga de enfermedades, permitiendo a los individuos alcanzar su máximo potencial y contribuir plenamente al desarrollo sostenible de la sociedad. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, en 2022 la cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Documentos Regionales

(SGSSS) se ubicó en 115,5 %, lo cual representa un aumento del 4,1 p.p. frente a 2018 (111,4 %). Así mismo, se encuentra que frente al 2021 (115,3 %) la cobertura aumentó en 0,2 p.p. Una vez se contrasta el indicador con la percepción de las comunidades se observa que el acceso a servicios de salud se ve limitado en la zona rural dispersa.

El acceso a la salud posibilita realizar un seguimiento adecuado a las mujeres en estado de embarazo, asegurando la culminación del proceso de gestación, parto y posparto de forma satisfactoria para la madre y su hijo. Con base en lo anterior, una manera eficaz de monitorear el avance del acceso oportuno a la salud está relacionado con el peso de los menores al nacer. Con base en lo anterior, una manera eficaz de monitorear el avance del acceso oportuno a la salud está relacionada con el peso de los menores al nacer, la mortalidad materna y la mortalidad infantil. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud:

- En 2022 la proporción de menores con bajo peso al nacer se ubicó en 9 %, lo cual representa un crecimiento de 2,1 p.p. frente a 2018 (6,9 %) y un incremento de 1,9 p.p. respecto al 2021 (7,1 %).
- En 2021 la Razón de Mortalidad Materna - RMM se ubicó en 131,3 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual representa un aumento de 56,4 frente a 2018 (74,9). Por el contrario, se presentó una disminución de 64,9 frente al 2020 (196,1 %).
- En 2021 la tasa de mortalidad infantil se ubicó en 7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, manteniéndose constante frente al año 2018 y 2020.

Según cifras del Ministerio de Salud en 2022 la tasa de fecundidad adolescente se ubicó en 64,8 por cada 1.000 adolescentes, lo cual representa una disminución de 44,3 con respecto a 2018 (109,1). Así mismo, se presentó una disminución de 53,2 con respecto a la tasa de 2021 (118).

Por otra parte, considerando las características poblacionales de la subregión con una alta concentración en niños, uno de los frentes más importantes para superar las situaciones de vulnerabilidad social es el relacionado con la nutrición. El acceso a una canasta de alimentos básicos se convierte en un desafío crucial para mejorar el bienestar, superar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria en una comunidad. Este aspecto adquiere mayor importancia en la primera infancia, dado que este grupo de población es especialmente vulnerable cuando se ve privado de un consumo adecuado de alimentos. Según cifras del Ministerio de Salud, en la subregión entre 2018 y 2021, el número de muertes por desnutrición en niños menores de cinco años registró una cifra promedio de 14 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Entre 2020 y 2021, se observa un aumento del 166 %, al pasar de 9 a 24 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. En lo que respecta al 2018, se encontró que la tasa de mortalidad por desnutrición aumentó en 14 muertes.

En la Subregión Urabá Antioqueño, el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada aumentó en 3,7 p.p. pasando del 20% en 2018 al 23% en 2022. Sin embargo, la inseguridad grave disminuyó en 7,0 p.p. pasando del 29% en 2018 al 22% en 2022. Este último tipo es más grave en las zonas urbanas en el 2022.

Como medida contra la desnutrición y con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria, resulta de especial importancia avanzar no solo en las actividades de comercialización agropecuaria, sino también en aquellas dirigidas al autoconsumo de la comunidad. Al respecto el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) reportó que, entre 2020 y 2022, el número de hogares beneficiados con proyectos agroecológicos para la producción de alimento y el autoconsumo fue de 6.776 hogares, de los cuales el 32 % fueron beneficiados en 2022.

Avances y rezagos en materia de educación

El acceso a la educación se constituye en un instrumento indispensable para fomentar el desarrollo y la movilidad social de la subregión. No solo se trata de formar capital humano para aspectos productivos, sino también de utilizarlo como un medio para lograr la transformación social y el cierre de brechas. Con base en esto, resulta relevante monitorear el progreso en el acceso a la educación. De acuerdo con cifras del MEN, en 2022 la cobertura neta total en educación fue 81,2 %, lo cual representa una disminución de 2,9 p.p. con respecto al 2018 (84,1 %). Por el contrario, se presentó incremento de 0,2 p.p. frente a 2021 (81,0 %). En lo que respecta a la cobertura bruta total en educación, se observa que en 2022 esta se ubicó en 113,0 % con una disminución de 13 p.p. frente al 2018 (125,9 %) y de 4,3 p.p. frente al 2021 (117,2 %).

Por un lado, es importante destacar el comportamiento que presentó la cobertura neta de educación media, la cual incrementó entre 2018 y 2022 en 15,1 p.p., pasando de 39,8 % a 54,8 %. Por otro lado, es importante destacar el comportamiento que presentó la cobertura bruta de educación media, la cual se incrementó entre 2018 y 2022 en 20,8 p.p., pasando de 85,9 % a 106,7 %.

La transformación social generada por la educación no se limita a su cobertura, su calidad tiene un papel de igual relevancia para alcanzar dicho cambio estructural ya que el cierre de las brechas socioeconómicas estará determinado por las capacidades con las que se forman a los jóvenes. En este sentido, los resultados en áreas clave como matemáticas y lectura crítica se convierten en indicadores fundamentales para evaluar y garantizar la calidad educativa. Al respecto, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11 realizadas por el ICFES en el año 2022, la proporción de estudiantes en la subregión que se encontraron en niveles mínimos e insuficientes en el área de lectura crítica fue del 59,2 %, lo cual representa una disminución de 3,2 p.p. frente al año anterior. Con respecto al 2018, esta proporción aumentó en 1,2 p.p. Por otro lado, la proporción de estudiantes en la subregión que se encontraron en niveles mínimos e insuficientes en el área de matemáticas en 2022 fue del 67,8 %, lo cual representa una disminución en 5,4 p.p. frente al año anterior. Con respecto al 2018, esta proporción se ha reducido en 0,1 p.p.

En este orden de ideas, uno de los enfoques clave para mejorar la calidad de la educación a nivel nacional ha sido la intensidad de la jornada escolar, bajo la premisa que la implementación de jornadas escolares completas o únicas permite un mayor desarrollo de los proyectos institucionales de los centros educativos. Sin embargo, la implementación de este tipo de medidas en las instituciones de la subregión, según cifras del DANE para el 2022, la proporción de instituciones educativas con jornada completa y/o única en la subregión fue de 15,2 %, lo cual representa un incremento de 0,1 p.p. frente al año anterior. Con respecto al 2018, la proporción de instituciones con este tipo de jornada disminuyó en 14,3 p.p.

Avances y rezagos en materia de vivienda

Los equipamientos de vivienda, especialmente el acceso a servicios de acueducto y saneamiento básico, se configuran como detonantes del progreso social y del bienestar de la población. Garantizar el acceso de estos servicios a toda la población se ha convertido en uno de los principales objetivos de la política nacional en busca de una mejor calidad de vida y cierre de brechas. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura de acueducto en el 2022 fue de 76,7 %, lo cual representa un incremento de 1,8 p.p. frente al año anterior. Con respecto al 2018 la cobertura ha aumentado en 37,4 p.p. Adicionalmente, la brecha de las coberturas en territorio urbano (94,7) y rural (50,4) es de 44,3 p.p.

Por otra parte, de acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la cobertura de alcantarillado en 2022 fue de 75,6 %, lo cual representa un incremento de 1,7 p.p. frente al año anterior. Con respecto al 2018 la cobertura se ha incrementado en 46,1 p.p. Adicionalmente, la brecha de las coberturas en territorio urbano (94,4 %) y rural (48,3 %) es de 46 p.p.

En línea con los avances y rezagos descritos previamente, la MCB del DNP permite dar orden de magnitud de las brechas sociales en las dimensiones de educación, salud, vivienda y ordenamiento territorial, inclusión social, cultura y deporte como se muestra en la tabla 2. Se encuentra que Necoclí ocupa las segundas brechas más altas en 3 de las 6 dimensiones: Salud (8,4 %), vivienda y ordenamiento territorial (57,1 %) e inclusión social (40,3 %). En línea con esto, se encuentra que la brecha más alta de la subregión se presenta en el municipio de Turbo, para la dimensión de vivienda y ordenamiento territorial (57,9 %). Por el contrario, se encuentra que Chigorodó es el municipio que presenta las menores brechas en las dimensiones de vivienda y ordenamiento territorial (28,0 %) e inclusión social (24,4 %), mientras que la brecha más baja en educación se encuentra en Turbo con 33,0 %.

Tabla 2. Brechas dimensión social

Municipio	Educación	Salud	Vivienda y ordenamiento territorial	Inclusión social	Cultura	Deporte
Apartadó	34,1%	7,0%	30,1%	29,1%	5,4%	6,2%
Carepa	33,7%	4,3%	30,0%	24,5%	5,4%	6,2%
Chigorodó	34,2%	5,4%	28,0%	24,4%	5,4%	6,2%
Dabeiba	43,5%	5,8%	44,1%	46,6%	5,4%	6,2%
Mutató	39,3%	21,7%	51,9%	39,5%	5,4%	6,2%
Necoclí	35,6%	8,4%	57,1%	40,3%	5,4%	6,2%
San Pedro de Urabá	37,5%	5,2%	52,9%	40,1%	5,4%	6,2%
Turbo	33,0%	6,1%	57,9%	35,9%	5,4%	6,2%

Fuente: DNP

Retos y oportunidades de la dimensión social

Si bien es cierto que se ha dado un avance en lo referente a la cobertura del SGSSS, se observa que la proporción de menores con bajo peso al nacer y la tasa de mortalidad por desnutrición ha aumentado para el 2022, lo cual refleja la necesidad de desarrollar planes de gobierno que estén enfocados en fortalecer el sistema de salud de manera integral. En línea con lo anterior, las comunidades expresan su disconformidad frente a la falta de servicios de salud en zonas rurales dispersas, lo cual dificulta el acceso oportuno a atención médica y aumenta las barreras para el cuidado de la salud de quienes residen en estas áreas. Es imperativo que se implementen estrategias efectivas y se fomente la colaboración entre los diferentes actores del sector salud, incluyendo gobiernos, instituciones médicas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

Documentos Regionales

El aumento de la desnutrición y la tasa de mortalidad puede estar relacionado con las problemáticas asociadas a la productividad en el campo: el alto precio de los insumos agrícolas, la falta de asistencia técnica incide en sus ingresos y en su capacidad de compra de alimentos:



PERCEPCIÓN DE LAS COMUNIDADES

"(...) la poca productividad que tenemos nosotros como productores primarios y proveedores de algunos productos de la canasta familiar, a veces hay productos que nosotros podemos producir y que en estos momentos ha ido disminuyendo ¿por qué? porque hemos tenido que cambiar de cultivos, en el caso del plátano y también la yuca (...) pero igual se sigue produciendo con las adversidades que se tienen en cuanto al manejo de cultivos. Las dificultades serían esas, como la disminución en la productividad de los de los cultivos. Aquí uno come lo que resulte, aquí no, no tenemos la posibilidad de decir, en un plato debe llevar nutricionalmente una harina, un carbohidrato, una un vegetal, no, aquí si hay huevos con plátano para comer, eso es lo que se come; y en todos los hogares hay estas dificultades por el tema económico, el arroz se subió la carne se subió y los que tenemos a la gallina del patio poniendo, y el cultivo produciendo plátano, por eso es lo que se come."

(Pequeños productores Turbo, Evaluación LB 2022)

En lo que respecta a la educación, se observa un aumento en las coberturas; sin embargo, desde las comunidades se insta al Gobierno para mejorar la calidad de educación que se imparte, junto con la adopción de programas que resulten relevantes para la población rural. Finalmente, en lo relacionado con los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a pesar de que se observan incrementos en la cobertura de estos servicios, las comunidades identifican que el servicio de acueducto y alcantarillado es intermitente, de baja calidad e insuficiente para toda la población.

3. Dimensión justicia y seguridad

Los PDET parten de reconocer los impactos diferenciales ocasionados por la situación de conflicto armado en el país. No en vano la incidencia de conflicto armado se constituye en uno de los cuatro criterios de focalización de los PDET. En este contexto, resulta indispensable alcanzar un escenario que priorice el progreso social y el desarrollo económico de la subregión.

En esta sección, se analizan los principales indicadores que reflejan el progreso en materia de justicia y seguridad en la subregión, con el fin de contrastarlos contra las percepciones de las comunidades. Adicionalmente, se presentan las metas identificadas para lograr un avance significativo en el mediano plazo.

Según los criterios de focalización PDET, la ocurrencia de hechos relacionados con el conflicto armado tiene un impacto significativo en las dimensiones económicas, sociales y ambientales de la subregión. Por lo tanto, uno de los principales desafíos de la política pública es reducir el riesgo de que ocurran hechos violentos en estas áreas. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, el índice de riesgo de victimización para 2022 fue de 0.33 (categoría medio bajo), lo cual representa una disminución de 0,02 frente al 2018 (0,35) y un aumento de 0,02 frente al 2021 (0,31).

Los cambios en el índice de riesgo de victimización son resultado de múltiples factores en el territorio. Por lo tanto, analizar los hechos violentos ocurridos en la subregión proporcionará un contexto más completo de la situación de justicia y seguridad. Por un lado, la tasa de víctimas de minas antipersonas para 2022 fue de 2 personas, lo cual se traduce en un retroceso de este indicador, dado que para el 2018 no se habían reportado registros.

Por otro lado, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa, no se tienen registros de secuestros para el periodo 2018 – 2022, lo cual sitúa a esta subregión como líder en este indicador. Finalmente, se encontró que la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes para 2022 (150) presentó un aumento con respecto al 2018 (133) y el 2021 (128).

Para la dimensión de justicia y seguridad, se cuenta con brechas referentes al gobierno territorial y justicia; sin embargo, se encuentra que para la dimensión de justicia, todos los municipios cuentan con la misma brecha (10 %). Se puede observar que el municipio de Carepa es el que tiene la menor brecha en la dimensión de gobierno territorial (11,8 %), seguido por Chigorodó (16,5 %) y Apartadó (19,5 %). Por el contrario, los municipios que presentan la brecha más alta son Dabeiba (37,2 %) y Mutatá (28,3 %).

Tabla 3. Brechas dimensión justicia y seguridad

Municipio	Gobierno Territorial	Justicia
Apartadó	19,5%	10,0%
Carepa	11,8%	10,0%
Chigorodó	16,5%	10,0%
Dabeiba	37,2%	10,0%
Mutatá	28,3%	10,0%
Necoclí	23,9%	10,0%
San Pedro de Urabá	24,7%	10,0%
Turbo	21,1%	10,0%

Fuente: DNP

Retos y oportunidades de la dimensión justicia y seguridad

De acuerdo con los aumentos observados en el indicador de hurtos por cada 100.000 habitantes, resulta fundamentada la preocupación transmitida por las comunidades en las mesas de trabajo. Por esta razón, resulta crucial tomar acciones concretas y efectivas para abordar estas problemáticas y mejorar la seguridad en la región. Asimismo, es esencial fortalecer la cooperación entre las autoridades locales, la sociedad civil y demás actores relevantes para implementar estrategias integrales que promuevan la tranquilidad y bienestar de la comunidad.

¿Cómo avanza la subregión hacia la Paz Total?

Recuperar la confianza en la institucionalidad hace parte del diagnóstico que realizan las comunidades de la subregión. Aunque se reconoce que la presencia de instituciones del orden nacional se ha recuperado a partir de la implementación de los PDET, la confianza hacia ellas continúa siendo débil, la estigmatización que vivió la población civil de la zona por todos los bandos del conflicto armado y el sentimiento de abandono en la atención de sus necesidades básicas en las décadas anteriores ha llevado a agudizar este sentimiento colectivo. Por esto se evidenció una narrativa ambigua frente a su seguridad, de un lado prefieren continuar “solos”, sin Fuerza Pública, pero por otro lado cuentan con la motivación para transformar su visión y comenzar a verla como una aliada.



“(…) La verdad, la verdad es que como comunidad siempre nos hemos sentido muy abandonados de la seguridad del Estado como tal y sí es bueno de que empiecen a hacer presencia, y que se ganen la confianza de la comunidad, porque más que todo ha pasado es ya nosotros como comunidad no creemos, no creemos en la ley de los del Estado, entonces, más que todo es eso, como que se ganen la confianza de nosotros como comunidad y que lleguen a apoyarnos más.”

(Mujer líder Carepa, Evaluación LB)

Hace sentido entonces que frente a la pregunta de la Evaluación de la Línea Base PDET, sobre cómo ha cambiado la seguridad en la subregión en los últimos cinco años, el 42.6% estuvo de acuerdo en que se ha mantenido igual, el 38% que ha mejorado, y una minoría del 12% piensa que ha empeorado. La persistencia de las extorsiones contra comerciantes y productores de la región también influye en esta percepción.

De otro lado, y pese al sentimiento predominante de que las cosas se mantienen igual en el tema de seguridad, se percibe una apertura de oportunidades económicas para la subregión a partir de los PDET. El 77% de una muestra representativa de personas encuestadas de la subregión está de acuerdo en que han mejorado las condiciones económicas, mientras que el 23,8% piensa lo contrario.

La opinión frente al cambio de las condiciones sociales es menos optimista pues solamente el 7% está de acuerdo en que los PDET han aportado a mejorar las condiciones sociales en la subregión, y el 71,8% no lo está. En el tema de reconciliación la mayoría, el 63,3 %, aún cree que no se ha avanzado en esa dirección frente al 17,7% cree que sí se han favorecido las condiciones para ello.

Otros indicadores alrededor del capital social de la subregión reflejan la necesidad de fortalecer la reconstrucción del tejido social y favorecer aspectos como la asociatividad y la confianza en las instituciones locales.

Documentos Regionales

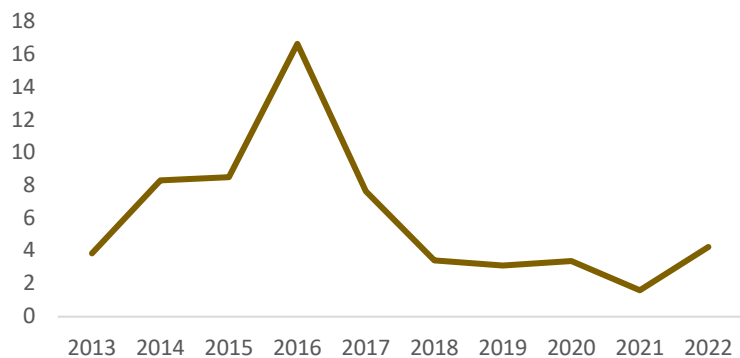
- El contexto para la emergencia de nuevos liderazgos ha sido favorable: El 45.6% de las personas encuestadas de la subregión percibe que en su comunidad hay más posibilidades de tener nuevos líderes ahora que participen en organizaciones de la sociedad civil, juntas de acción comunal y asambleas municipales, frente a un 44.3% que opina lo contrario.
- La Iglesia y el Ejército Nacional son las instituciones en la que la población más confía: pese a que la Iglesia, fue la institución que más personas coincidieron en que les genera confianza, con el 27%, seguida del Ejército Nacional, con el 26%, a la mayoría de las personas ambas les sigue generando desconfianza. De otro lado, la Alcaldía (90%), las instituciones de justicia (89%), la Defensoría del Pueblo (87%) y el Gobierno Nacional (84%) fueron las que menor confianza inspiró a las personas consultadas. La confianza entre la comunidad también tuvo una percepción baja: el 29% de las personas encuestadas confía mucho en otros miembros de la comunidad, frente a un 71% que confía poco.
- La mayoría de las personas que han vivido algún evento de vulneración de sus DDHH decide no tomar acciones frente a ello: El 5.3% de los encuestados o a algún miembro de su familia, fue víctima de la violación del derecho a la vida, a la seguridad personal, a la libertad de expresión o a la libre circulación en los últimos 12 meses. El 66.3% optaron por no tomar alguna acción frente a esta situación, y solo el 16.7% puso una denuncia. Este bajo porcentaje podría explicarse en que el 64.6% de las personas consultadas expresaron que sintieron miedo de las represalias por denunciar ante alguna entidad del estado, el 32.5% expresaron no sentirlo.

4. Dimensión Medio Ambiente

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” tiene como objetivo el cambio del relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y armonía con la naturaleza. Es por esto por lo que el artículo 26 del PND propone una coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales.

En primer lugar, de acuerdo con cifras del IDEAM, la tasa de deforestación por cada 1000 ha de bosque estable presentó una tendencia creciente desde 2018, pues se registró un incremento del 24% hasta el último año, pasando de 3,4 ha en 2018 a 4,3 ha en 2022. Respecto al 2021, hubo un aumento del 164% en el 2022. Los mayores niveles de deforestación durante el 2022 se presentaron en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Tasa de Deforestación por cada 1000 ha de Bosque Estable



En esta misma línea, también resulta relevante analizar la tasa de delitos ambientales por cada 100.000 habitantes, la cual hace seguimiento y control al aprovechamiento ilícito de recursos ambientales y biológicos, tráfico de fauna, deforestación, daños en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental.

De acuerdo con información del MinDefensa, para el 2022 la tasa de delitos ambientales por cada 100.000 habitantes se ubicó en 4 delitos ambientales en la subregión de Urabá Antioqueño, lo cual implica una disminución de 2 delitos ambientales respecto al 2021. Del mismo modo, se observa una disminución de 2 delitos ambientales respecto al 2018.

Se identifica como apuesta regional al Programa de Prevención y Atención de la Erosión Costera en los municipios de San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí y Turbo.

A partir de la dimensión de ambiente y desarrollo de la MCB del DNP, es posible afirmar que todos los municipios de la subregión presentan brechas inferiores al 10 %, a excepción de Dabeiba con una brecha de 14,6 %. Se encuentra que las menores brechas están en los municipios de San Pedro de Urabá (4,1 %), Carepa (5,3 %) y Chigorodó (6,6 %).

Tabla 4. Brechas dimensión ambiental

Municipio	Ambiente y desarrollo
Apartadó	8,1%
Carepa	5,3%
Chigorodó	6,6%
Dabeiba	14,6%
Mutatá	9,9%
Necoclí	7,4%
San Pedro de Urabá	4,1%
Turbo	7,4%

Fuente: DNP

Apuestas Regionales

líneas de acción que identifico el PME como estratégicas para impulsar la economía de la subregión:



Desde los ejercicios realizados por la FAO en torno a las líneas productivas, proyectos detonantes en los territorios y retos a trabajar en los PDET se identificaron distintas líneas de trabajo para potenciar la economía agropecuaria de estos territorios:

Ampliación de las plantas de procesamiento de café, arroz y cacao

Tratamiento de selección, secado y almacenamiento de frijol y construcción de infraestructura de cría de ganado en pie

Renovación de cultivos de cacao, caña panelera, entre otros en la subregión

Complementar cadenas de valor de algunos productos como el café y el maíz, además de mejorar e implementar prácticas de selección y trilla.

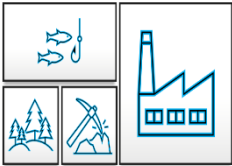
Se propone impulsar nuevas alternativas para la transformación económica de la subregión, la diversificación y sofisticación de los sectores productivos tradicionales y de interés colectivo tales como:



AGROPECUARIO

Consolidar las cadenas productivas de cacao y cárnico bovino mediante la tecnificación y la adición de valor agregado al producto final. (Perfil Socioeconómico de la Subregión Urabá Antioqueño y PIDARET)

▷▷ 263 iniciativas PATR al sector agropecuario



INDUSTRIA

Impulsar la minería de metales preciosos en los municipios de Mutata y Taraza. (Perfil Socioeconómico de la Subregión Urabá Antioqueño y METAREC)

▷▷ 20 iniciativas dirigidas a impulsar el sector industrial



INFRAESTRUCTURA

- Mejoramiento de las vías terciaria Ye Pavarandó —Chontadural, en el municipio de Mutatá", en el tramo de 1.15 km vial que corresponde a la longitud total de la vía que comunica la vereda Chontadural con las demás veredas aledañas y con el casco urbano del municipio de Mutatá (PPI 2022-2026)
- Vía Arboletes – Necoclí 78 km (PPI 2022-2026)

▷▷ 178 iniciativas encaminadas a mejorar la infraestructura



SERVICIOS

- El turismo en la subregión está orientado a la riqueza ambiental como son las playas, el volcán de lodo y el parque natural los Katios, y el etnoturismo la observación de aves y el desove de las tortugas. (Perfil Socioeconómico de la Subregión Urabá Antioqueño y METAREC)
- Consolidación del sistema portuario, vinculándolo al sistema nacional de puertos y transporte multimodal (Perfil Socioeconómico de la Subregión Urabá Antioqueño y METAREC)

▷▷ 11 iniciativas encaminadas a mejorar el sector de servicios turísticos

Basados en la evidencia que aportan las diferentes estadísticas relacionadas con la dimensión social, así como la perspectiva de las comunidades, se identifican metas que deben ser focalizadas para acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la subregión. Lo anterior se deriva en un mayor acceso a servicios tales como salud y educación, y condiciones dignas en la vivienda que ocupan.

POBREZA

Disminuir los alto niveles de pobreza mediante alternativas de producción que generen ingresos

IPM

▶ 2022: 21 %

▶▶ IPM 2030: 11 %



EDUCACIÓN⁴

Promover la permanencia de los estudiantes en los centros educativos y la continuación de su ciclo educativo en la capacitación de la población para la obtención conocimientos, habilidades y destrezas para su inclusión en el aparato productivo con la construcción de la Nueva sede, multicampus o complejo educativo de educación superior pública Subregión Urabá - Arboletes

Cobertura neta educación media

▶ 2021: 49,3 %

▶▶ 2030: 62,4 %



SERVICIOS PÚBLICOS

Mejorar la provisión efectiva de los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica como reducción de las brechas sociales de los municipios de la subregión

Cobertura agua potable: ▶ 2021: 76,7 %

▶▶ 2030: 86,2 %



Cobertura en energía:

▶ 2021: 94,3 %

▶▶ 2030: 100%

De acuerdo con lo observado en los diferentes indicadores de justicia y seguridad, y en conjunto con la percepción de las comunidades, desde los ejercicios de prospectiva de la ART se identifica la necesidad de disminuir los hechos violentos hacia las comunidades. Esto, debido a que en lo corrido del 2023 han asesinado a 7 líderes y firmantes de paz.

Por lo anterior, la apuesta más importante es dar el acceso a la justicia y disminuir los delitos de menor impacto en la región como hurtos, homicidios y violencia intrafamiliar. Para esto, se propone reconstruir el tejido social mediante el deporte y la recreación, mediante la construcción del Centro de alto rendimiento Subregional, el cual permitirá el acercamiento de toda la comunidad.

Riesgo de victimización⁵ ▶ 2022: 33 %

▶▶ 2030: 16 %



Hectáreas Cultivadas de Coca

▶ 2021: 63

▶▶ 2030: 0

⁴ Plan Plurianual de Inversiones PPI 2022-2026 Pag 59

⁵ ** <https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>

* <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/>

* Plan Plurianual de Inversiones PPI 2022-2026 Pag 57"

¿Cómo perciben las comunidades la implementación de los PDET⁶?

Las entrevistas y grupos focales realizados en la evaluación de la Línea Base PDET en 2022, y los encuentros subregionales realizados en 2023, permitieron identificar dos ideas centrales sobre cómo va la implementación.

Las comunidades manifiestan su motivación de que sus capacidades de participación y seguimiento se fortalezcan

- Los actores locales encuentran que es vital mejorar la comunicación con la institucionalidad para dar más claridad sobre cómo va la implementación de los PDET.

El PDET se moviliza a partir de una mirada integral del territorio, lo que requiere que los avances sean incluyentes para todos los sectores de la ruralidad

- De acuerdo con algunos líderes locales, hay municipios y veredas que continúan sin proyectos estructurados.
- La articulación de las entidades territoriales locales para la estructuración y desarrollo de las iniciativas PDET es débil.
- Las familias que hacen parte del PNIS piden que se amplíe a nuevas familias que requieren de la intervención del programa.
- Se pide a la institucionalidad que considere políticas de prevención de la explotación de recursos en territorios PDET, dado que en la subregión ésta ha generado procesos violentos

Para las comunidades locales el enfoque étnico y de género en la implementación debe continuar fortaleciéndose

- Los grupos de mujeres de la subregión piden mayor apoyo para la creación de organizaciones y asociaciones de mujeres, así como mayor visibilidad de sus necesidades en la toma de decisiones y priorización de proyectos.
- Los grupos étnicos no cuentan con formuladores ni estructuradores de proyectos, por lo que sus iniciativas no han logrado materializarse. Tampoco hay recursos para hacer seguimiento a las iniciativas propias étnicas
- Representantes del MEC piden ser convocados a participar en las mesas de impulso.

⁶ Esta sección se construyó con base en las narrativas de líderes(as) y funcionarios(as) de la región que participaron de la Evaluación de la Línea Base PDET en 2022, o de los encuentros subregionales preparados por la ART en 2023.